

AMBIEN-TICO

Revista mensual del proyecto Actualidad Ambiental en Costa Rica
Dirección: Eduardo Mora · Montaje: Cecilia Redondo · Circulación: Enrique Arguedas
Escuela de Ciencias Ambientales · Universidad Nacional · Costa Rica
Apartado postal: 86-3000 · Email-emora@irazu.una.ac.cr.

SUMARIO

- De la descentralización de la gestión ambiental y de la participación local real. 1
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA COSTARRICENSE.
- Energía y crecimiento demográfico. Una revolución sin precedentes. 4
JEAN-PAUL DELÉAGE Y DANIEL HÉMERY
- La indiferencia ambientalista frente a la potenciación del mercado. EDUARDO MORA C. 10

De la descentralización de la gestión ambiental y de la participación local real

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA COSTARRICENSE
-AMIGOS DE 'LA TIERRA COSTA RICA -
(AECO-AT)

De acuerdo con el Ministro de Ambiente y Energía, señor René Castro, parte de su gestión como funcionario de este gobierno ha consistido en "poner en marcha un proceso de redefinición de la gestión ambiental en Costa Rica, que implica una modificación sustancial de los criterios y las formas de acción pública en esa materia"¹.

¹ "Descentralización y municipalización de la gestión ambiental. Alocución de René Castro ante representantes

Según el Ministro, la esencia de ese proceso es "la descentralización de las competencias y recursos estatales, *a fin de redimensionar el rol de los gobiernos y las comunidades locales*"² en las tareas de conservación y manejo de los recursos naturales" y "el propósito principal de este proceso radica en el fortalecimiento del poder de los gobiernos

de municipios (San José, 5 de diciembre de 1995)". Tomado de *Ambien-Tico*. N° 38, marzo de 1996, página 2.

² La negrilla es del autor del artículo.

locales, en función de una mayor eficacia de la política ambiental del país”³.

Como parte de este proceso del que habla el Ministro Castro, ya se han firmado convenios en los cuales se ha acordado trasladar a algunas municipalidades funciones tales como la autorización de concesiones mineras no metálicas, el otorgamiento de permisos forestales, la administración de áreas protegidas y la gestión del ordenamiento territorial⁴.

Tal y como es del conocimiento general, el tema de la descentralización de las funciones del Estado no es nuevo. Desde inicios de los años 80, los diferentes organismos financieros internacionales han venido “proponiendo” la aplicación de políticas de descentralización estatal, las cuales, entre otros, supuestamente tienen como objetivos la disminución de los “costos” de operación del aparato público, así como el “empoderamiento” de las poblaciones locales. Este proceso se ha generado en el marco de un concepto de Estado que ha dejado de tener objetivos nacionales.

En el campo del ambiente, actualmente el Ministerio de Ambiente y Energía está impulsando un proceso mediante el que se pretende, supuestamente, propiciar la participación de las comunidades en la gestión ambiental, mediante la denominada “municipalización” de esa gestión.

Es importante destacar que, en términos generales, las ONG’s, a través de su gestión, desde hace algún tiempo también han venido tratando de reivindicar y de promover la participación real de las comunidades en los

diferentes procesos de toma de decisiones y, por tanto, de propiciar un verdadero proceso de apropiación del “poder local”.

Ante este discurso oficial y ante las acciones emprendidas por el gobierno en el plano de la descentralización de las funciones ambientales, un análisis superficial llevaría a la conclusión de que el Estado está correspondiendo al interés legítimo y democrático de propiciar un proceso real de empoderamiento y participación local⁵. En principio, las acciones emprendidas en relación con la descentralización de la gestión ambiental parecen corroborar ese interés y, de plano, como se mencionó antes, ya se están trasladando a las municipalidades algunas funciones específicas relacionadas, fundamentalmente, con gestiones de administración de la gestión ambiental.

Sin embargo, vale decir que el discurso planteado tiene un tono demasiado condescendiente y agradable como para no tener algunas sospechas y dudas. Visto más en profundidad, este asunto de la descentralización -o municipalización- de la gestión ambiental parece tener más una dimensión “ideologizada” que concreta. Ese discurso y las decisiones políticas tomadas en función suya están creando una “atmósfera” positiva para legitimar y desarrollar el proceso global de transformación o reforma del Estado: para lograr una de las mayores exigencias de los organismos financieros internacionales, es decir, la “supuesta” disminución del tamaño del Estado, con una consecuente reducción de los diferentes

³ *Ambien-Tico*, Op. Cit, página 2.

⁴ Es muy importante señalar que el proceso mediante el cual se seleccionaron las municipalidades con las que se firmaron convenios respondió a una lógica estrictamente vertical, contrario a los principios que supuestamente inspiran el propio proceso. Este proceso no fue ni descentralizado ni participativo, sino que fue dirigido por diputados del Partido Liberación Nacional.

⁵ Vale la pena destacar que este proceso está siendo cada vez más interiorizado y asumido -por tanto exigido- por las propias poblaciones locales. Tomemos como ejemplo el caso de las comunidades de Miramar, que han reaccionado ante el conocimiento de que el propio Ministerio de Ambiente y Energía ya otorgó una concesión de explotación de oro mediante las técnicas de cielo abierto para una compañía canadiense, sin que se les brindara la información pertinente y sin que se les consultara en ningún nivel.

mecanismos de control y de los "costos de operación" de las instituciones públicas.

Hasta ahora, muy a pesar de lo que se dice en los discursos oficiales, los convenios que se han firmado entre algunas municipalidades y el Ministerio de Ambiente y Energía - mediante los cuales se pretende concretar estas políticas de descentralización- no han otorgado ningún poder real de decisión ni a las comunidades ni a las propias municipalidades. Tres aspectos son importantes de señalar en relación con la anterior afirmación:

1. Las acciones de descentralización que se han dado hasta ahora evidencian que tal descentralización no se está haciendo sobre la administración del territorio (en su múltiple dimensión humana y ambiental). Lo único que se ha hecho ha sido delegar funciones y compromisos en materia de ambiente a los poderes locales, con el agravante de que, tanto en los planos administrativo y organizativo como en el correspondiente al de la gestión ciudadana, no siempre existe capacidad local para hacerle frente a esas nuevas funciones, ya que históricamente, tanto las municipalidades como las propias organizaciones locales, han estado excluidas del diseño y de la implementación de las políticas de desarrollo. En este sentido, cabe mencionar que el marco municipal actual dificulta o limita el desarrollo de procesos verdaderamente participativos. A manera de ejemplo, tómese el caso de las funciones y potestades del Ejecutivo Municipal, el cual acapara una gran cantidad de prerrogativas, como el derecho de veto.
2. En el plano político institucional, el engranaje normativo existente no posibilita ni facilita condiciones para una participación real y efectiva de los

poderes locales. Dado que las municipalidades reproducen y responden a la lógica y a la estructura bipartidista tradicional, la gestión municipal -que debería estar orientada por el bien social común- termina sacrificándose en función de esa lógica.

- En este sentido, cabe plantear la interrogante de si las municipalidades, a pesar de ser consideradas formalmente como instancias de representación local, asumen en la realidad esa representatividad. En la búsqueda de la apropiación real del poder local por parte de las comunidades, la respuesta a esta pregunta alcanza una gran trascendencia. En este espacio político, son muy comunes los conflictos y las desaveniencias entre los pobladores locales y los entes municipales, generalmente motivados por situaciones de exceso de burocracia, corrupción o abandono de las gestiones municipales.
3. En el plano financiero y en el relativo al instrumental técnico y de recursos, muy a pesar de la ley del impuesto territorial, las municipalidades carecen de los recursos humanos y del potencial técnico para atender las necesidades derivadas de las nuevas funciones. Ya, de por sí, las municipalidades afrontan serias limitaciones e incapacidades para atender las responsabilidades que les corresponden sin asumir las nuevas funciones derivadas de este proceso de descentralización. La forma en que lograrán hacerle frente a las nuevas responsabilidades es todavía una incógnita.

Ante el proceso de descentralización, *esta carencia de recursos sólo puede crear condiciones para legitimar y viabilizar la gestión privada en la administración de los bienes públicos, es decir, servir como*

canal para justificar el que la administración pase a manos de empresas privadas mediante la figura de la concesión, lo cual es perfectamente posible desde el punto de vista legal.

De esta manera, el proceso de descentralización no sólo está generando una actitud generalizada de aceptación pasiva del proceso de dismantelamiento estatal, sino que está creando condiciones laxas -poco claras e inseguras- de control, así como legitimando y viabilizando el paso a manos privadas de las propias acciones de administración.

Ante esta situación, se hace necesario plantear que el proceso de descentralización, si no es acompañado o complementado con una serie de decisiones y acciones políticas, jurídicas y financieras, lo que puede generar condiciones para facilitar el proceso de recorte y dismantelamiento estatal, y no necesariamente producirá condiciones para

lograr una real y decisiva participación de las poblaciones locales y de sus organizaciones en la toma de decisiones políticas.

Eventualmente, las decisiones y acciones complementarias deberían estar orientadas a dotar de los recursos necesarios a los municipios, a abrir una participación real de las poblaciones locales⁶ en los procesos de

Toma de decisiones y a crear espacios y condiciones para que las poblaciones locales y sus organizaciones puedan monitorear y fiscalizar el uso y el destino de los recursos que recibe el Estado.

⁶ Esto debería pasar por la introducción de reformas al código electoral, mismas que los propios partidos mayoritarios -los impulsores de este supuesto proceso de empoderamiento local- se han rehusado a llevar a cabo. Entre estas reformas se incluyen aspectos como la celebración de elecciones municipales a mitad de período y la apertura de la participación electoral más allá de los partidos políticos (por ejemplo, permitir la participación de las asociaciones.)

Energía y crecimiento demográfico. Una revolución sin precedentes

JEAN-PAUL DELÉAGE Y DANIEL HÉMERY

Numerosas civilizaciones han conocido graves crisis en relación con la energía. Pero el capitalismo parecía haberse despreocupado de esta tensión: obtenía su aparente infinita capacidad de reproducción del provecho que sacaba de las inmensas existencias de energía fósil disponibles a bajo precio. Su desarrollo sólo estaba marcado por las crisis derivadas de los desequilibrios cíclicos entre la lógica de la

inversión y la del consumo. Pero se veía obligado, en cada momento, a extender el área de abastecimiento a su sistema energético y a desplazar las fronteras técnicas.

Desde hace dos decenios ya no ocurre lo mismo. Sin embargo, en el centro de la dinámica del capitalismo hay una crisis cuyo final no se vislumbra y que determina los grandes enfrentamientos políticos que marcan su

trayectoria histórica. El sistema energético mundial era el envite de la crisis del Golfo, pero la paradoja es que ésta sólo se enfocó -excepto por los especialistas de la economía petrolífera- bajo el ángulo político, estratégico y militar. Sin embargo, el conflicto sólo era, en su base, un episodio de la lucha por el reparto de la renta petrolífera (en 1990 los intercambios de petróleo alcanzaron los 700 mil millones de dólares).

Se está librando una guerra inexplicable para apropiarse de las ganancias que engendran las ramificaciones energéticas; pero esta guerra es también la que están librando los hombres contra la naturaleza para aumentar la base de estos beneficios. Con respecto a estos dos puntos, el campo de batalla del Tercer Mundo es el más desconocido, pero no el más reducido. La crisis de la leña sigue agravándose bajo el efecto de la mayor demanda, por parte del Gargantúa industrial, de madera de construcción y de la combustible de los campesinos de Asia, Africa y América Latina. El principal resorte del desequilibrio es el increíble crecimiento de estas poblaciones, debido a su introducción en la fase de la transición demográfica y a la ausencia de la revolución energética en los campos pobres y superpoblados del Sur.

El caso de China sirve de ejemplo. Una familia china gasta treinta y seis veces menos energía que una norteamericana y el consumo de electricidad por casa en China es inferior a 120 kwh por año, lo que una nevera norteamericana de relativo buen rendimiento consume en dos meses.

Menos de un 10% de las familias chinas tienen una nevera y, en las zonas rurales, se utiliza madera y paja para cocinar y calentarse. La mayoría de las familias campesinas y millones de hogares urbanos utiliza todavía madera y carbón. Esto trae como consecuencia que el bosque chino, uno de los más gravemente afectados, ya sólo se extiende por el 8% al 10% de territorio.

Incalculables efectos sociales

En el conjunto del Tercer Mundo (incluida China) -cuya población se estimó en 2.100 millones de personas en 1960 y que debería aproximarse a 7.000 en el 2025-, el consumo de energía es muy débil en comparación con el de

los países industrializados: en Nigeria, que no es el país más desprovisto, el consumo medio anual por habitante en 1989 fue sólo de 2 barriles, principalmente de combustibles tradicionales, frente a más de 40 barriles, de energía fósil o de electricidad, en Estados Unidos y Canadá. Este consumo aumentará cada vez más, pero, debido a la falta de medios financieros, el uso de energías comerciales corre el gran riesgo de limitarse al sector urbano e industrial. Como consecuencia, crecerán rápidamente la demanda de madera y la presión sobre las muy débiles reservas forestales de los países tropicales y subtropicales. Sus efectos medio ambientales y sociales serán incalculables, como queda demostrado por el estado de los ecosistemas del Sudeste de Asia, de Amazonia y de Africa.

En su vertiente industrializada, el mundo vive desde 1973 el momento de la crisis petrolífera recurrente. Después de las dos subidas de 1973 y 1979 y de la baja de 1986, se ha producido una tercera subida desde agosto de 1990, incluso si es cierto que 25 dólares de 1990-1991 apenas corresponden a los 10 dólares obtenidos en octubre de 1973. El envite ha sido el mismo en cada ocasión: repartir la renta petrolífera -que hasta 1970 se repartían prácticamente las empresas occidentales- entre éstas últimas y los nuevos participantes en el mercado. Estas pruebas se despliegan en el triple contexto de una creciente demanda, de una tendiente ralentización de las tasas de aumento de producción y de un agravamiento de la crisis ecológica engendrada por el uso de combustibles fósiles.

Lo mismo pasa con el conjunto de los combustibles fósiles. Se estima en 10.000 millones de barriles el tonelaje por explotar, es decir, ciento setenta años de consumo en su actual nivel. Mucho más breve será la duración de la explotación de las reservas de petróleo y de gas. Si el consumo acumulado sigue duplicándose cada quince o veinte años, como ocurre desde hace un siglo, el 80% de las reservas explotables desaparecerán de aquí a treinta o cuarenta años. El último choque petrolífero puso en evidencia, más que ningún otro, la vulnerabilidad de las economías industrializadas, su gran dependencia del

Próximo Oriente que aseguraba en 1989 el 53% de la exportación mundial de bruto y el 21% de la de los productos refinados. Esta dependencia creció de nuevo después de la caída de los precios de 1986, debido al abandono de la política de ahorro de energía y de la sustitución de nuevas ramificaciones de hidrocarburos. El consumo de petróleo de los países de la OCDE, que no había dejado de disminuir después de 1979, ha aumentado desde 1985, pasando de 34 millones a 38 millones de barriles por día.

La crisis de 1991 demostró la extrema rigidez y la verdadera dinámica de la reputación de la economía petrolífera. Toda baja de las cotizaciones del bruto significa una vuelta al consumo, disminuye las ganancias susceptibles de financiar las producciones más caras, los "nuevos petróleos" (de América del Norte, del Artico, etc) y la exploración de las zonas de riesgo; bloquea el desarrollo de la energía nuclear y de las otras energías competidoras (gas, carbón), acrecienta la dependencia de la demanda mundial con respecto a los productores cuyos costes son más bajos, es decir los de la OPEP. Pero siempre llega el momento en el que la demanda dirigida a estos últimos alcanza sus capacidades de máxima producción. De esta manera, maduran las condiciones de una brutal subida de las cotizaciones. La crisis periódica se inscribe en la estructura física, política, militar y comercial de un sistema estructurado alrededor de un organigrama dominante y que se desarrolla según la prioridad de la lógica de la oferta.

El conflicto del Golfo también demostró el enorme riesgo de desestabilización de la economía mundial que conlleva la preponderancia del organigrama petrolífero. El período de reacción de ésta a las crisis coyunturales es casi tan largo como el de los de gran inversión, el nuclear o el carbón. Es decir, se trate de los Estados Unidos, de la OPEP - también desgarrada por el conflicto del Golfo-, de la Agencia Internacional de Energía (AIE) creada en 1974 como respuesta a la OPEP, o de los "grandes", ninguna de estas fuerzas controla el mercado, hecho demostrado por el contragolpe de 1986.

La tercera dimensión de la crisis fue el fracaso de las tentativas de disminuir las tensiones, por medio de la inclusión del organigrama nuclear en el sistema mundial. Este organigrama no logró movilizar el enorme capital necesario para su financiación. Pero el verdadero talón de Aquiles fue la total pérdida de credibilidad después de los accidentes que se produjeron en Three Mile Island y sobre todo en Chernóbyl. La oposición a la energía nuclear se ha endurecido en todas partes. El organigrama supergenerador ha sufrido una absoluta derrota. La industria nuclear no ha podido remontar su principal escollo, el "mayor riesgo", cuya probabilidad y dimensiones son incalculables cuando base, un episodio de la lucha por el reparto de la renta petrolífera (en 1990, los intercambios de petróleo alcanzaron los 700 mil millones de dólares). La industria nuclear no ha podido remontar su principal escollo, el "mayor riesgo", cuya probabilidad y dimensiones son incalculables. Cuando se comprobaron en la realidad, sobrepasaron todas las previsiones de los guiones arrogantes y generalmente tranquilizadores que ingenieros y científicos habían escrito.

La otra cara del riesgo nuclear es la imposible gestión de los residuos radiactivos, sin olvidar la inevitable incidencia del aumento de programas civiles de proliferación de la bomba. Cuando los noventa y seis reactores en construcción se acaben producirán 10.000 toneladas de residuos por año; como cada uno de los actuales emplazamientos de almacenamiento puede contener 70.000 toneladas, se tendría que crear uno nuevo cada siete años...De todas maneras -y quizás es ésta la verdadera razón del fracaso-, el organigrama nuclear no ofrece ninguna perspectiva de producción a precios tan bajos como los que la electricidad de origen hidráulico o térmico ofreció antes de 1976. En el caso del sistema existente, lo nuclear lo demuestra: la energía siempre será cara, y puede considerarse que la mayoría de los países industrializados han alcanzado el umbral a partir del cual todo nuevo incremento de la producción comporta más gastos que beneficios. La huida hacia un productivismo de creciente coste global pierde entonces su sentido económico.

Retrospectivamente, los historiadores muy bien podrían ver, a finales del siglo XX, un principio de toma de conciencia, de las limitaciones de nuestro mundo: recursos limitados, espacio limitado. Y en el centro del problema, la energía; que jamás se ha consumido tan abundantemente, que nunca ha estado tan mal repartida. El conflicto entre la tendencia del crecimiento indefinido y los límites infranqueables de la naturaleza, corre el riesgo de culminar, en el siglo XXI, en el fenómeno de la desviación antrópica de los climas debido al aumento del efecto invernadero.

Controlar, economizar

A partir del año 2050, el nivel del mar podría elevarse 2 metros. Las consecuencias podrían ser especialmente graves para las regiones costeras superpobladas de los deltas de los grandes ríos de Asia. Se produciría un desplazamiento de decenas de millones de personas, que engrosarían el número de millones de "refugiados del medio ambiente" que viven en las chabolas del Tercer Mundo. Este peligro demuestra cuan urgente es tomar alternativas de conjunto. De hecho, constituye una oportunidad para volver a lanzar la industria nuclear, sobre todo en Japón y en Europa del Este. Por el contrario, y con razón, los movimientos ecologistas insisten en la necesidad de una política vigorosa de control y ahorro de energía. Igualmente crucial es el debate sobre las actuales modificaciones bioclimáticas que afectan a la producción forestal y sobre todo agrícola, y que podrían favorecer a las regiones frías para que abastezcan cereales en óptimas condiciones; otras zonas tendrían que enfrentarse a situaciones más difíciles. Así, la estructura energética mundial está corriendo el riesgo de experimentar una redistribución general de las relaciones de fuerza y de poder entre grupos sociales, naciones y Estados, sin que por ello los Estados más desprotegidos se vean beneficiados.

Orientar de nuevo el sistema energético es invertir las tendencias extremadamente poderosas que se han impuesto desde principios de la revolución industrial. Este desafío tiene que afrontarse dentro de unas dimensiones ecológicas

y técnicas, culturales y sociales. La mejora de la eficacia energética y el recurso a las fuentes renovables, la desaparición del despilfarro, el rechazo a la tala en los países tropicales, todas estas cosas sólo se podrán conseguir con una profunda reforma -a escala local, regional y continental- de los modos de producción y de reparto de las riquezas que predominan en el mundo.

La dimensión continental es particularmente pertinente para los pueblos europeos. En efecto, ciertos elementos de esta transición se han establecido perfectamente a esta escala. Estos elementos sufren un reacondicionamiento del espacio: espacio urbano -cuyo desarrollo está ligado a las selecciones de la producción, a la agricultura industrializada, a la hipertrofia de los aparatos del Estado, a las desigualdades sociales-, espacio rural y espacio marítimo. En el terreno del transporte existen varias alternativas.

Si se aplicasen las recomendaciones dadas en un reciente estudio (1), basado en el uso de todos los recursos técnicos disponibles y de reglamentaciones más estrictas que las actuales, se permitiría la reducción en un 25% del consumo de petróleo en este sector y en un período de veinte años; es decir 50 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) por año para la CEE.

Pero no habrá reorientación ecológica y humana sin un masivo traslado a los ferrocarriles de las inversiones en carreteras, sin una masiva reducción del uso del automóvil privado y de los transportes por carretera. En Europa, la intensificación de los transportes aéreos así como el creciente uso del automóvil en la ciudad, sólo obedecen a la racionalidad del absurdo.

Cualquier producción electronuclear de un país europeo afecta a todos los pueblos del continente; lo mismo sucede con la combustión de los recursos fósiles. La transición a escala europea valorizaría la complementariedad entre los yacimientos de energías fósiles y renovables de las grandes regiones biogeográficas de la zona. A través de la economía de inversión, se favorecería la puesta a punto técnica y científica de una alternativa energética. Esta transición implica

recurrir lo menos posible a todas las energías renovables, en particular la solar (2), y el desarrollo de la cogeneración electricidad-vapor, que multiplica por dos la energía útil extraída de un recurso dado. Pero también es muy importante actuar sobre el consumo en todos los sectores: producción, *hábitat*, desplazamiento. Algunas medidas de ahorro y de uso racional ya han probado su eficacia: entre 1973 y 1987, la cantidad de petróleo necesaria para producir el equivalente de 1 dólar del Producto Nacional Bruto (PNB) disminuyó un 35% en América, un 40% en Europa y un 50% en Japón.

Mucho más eficaz que las inversiones concentradas de los programas petrolíferos y nucleares es el ahorro en el *hábitat* y en el sector terciario, en la industria y en los transportes; permitiría revitalizar el tejido industrial, crear empleos duraderos, participar en la nueva orientación de los modos de producción y de vida. Esto es una realidad en Europa occidental, pero mucho más en la del Este, donde la drástica reducción de un insensato despilfarro ofrece enormes posibilidades de ahorro de recursos y de creación de empleo.

Estas nuevas orientaciones no pueden concebirse sin una radical modificación de las opciones económicas que moldean a las civilizaciones durante largos períodos de tiempo, sin una ampliación de la democracia política y social, sin transformaciones profundas en los comportamientos de los individuos y por lo tanto de los sistemas educativos. En Europa la gran mayoría se encontró y aún se encuentra ante hechos consumados. Las opciones son privativas de los grupos tecnocráticos ligados al poder financiero y estatal.

En los dos frentes, ecológico y social

Mientras que los progresos científicos deberían incrementar las posibilidades de las opciones técnicas, el modo de producción capitalista restringe las opciones reales bajo el aparente viso de la diversidad del sistema mercantil. Nada variará si no se atacan estos problemas simultáneamente en los dos frentes, ecológico y social. El paro masivo no se ha generado debido a un sistema productivo ecológico, sino justo por

lo contrario. La nueva orientación energética está ligada al pleno empleo y a la reducción del tiempo de trabajo asalariado que comporta. Cualquier tipo de compromiso sobre la gestión ecológica que deje plenos poderes a los actuales dirigentes de la economía para regular los problemas de trabajo asalariado sería irresponsable. La lucha contra la subordinación de los seres humanos a las máquinas y la lucha contra la destrucción de los ecosistemas corren parejas. La reducción del tiempo de trabajo es inseparable de la orientación hacia una producción más económica en energía y en recursos. Durante estos últimos veinte años, el haber tenido en cuenta los costes ecológicos ha provocado el aumento en un tercio de los costes de producción de los productos petrolíferos, y la mitad en los de la electricidad. Los costes ecológicos y sociales que no se han tomado en consideración siguen siendo enormes y están en general en alza para la mayoría de las formas de energía: riesgos de muertes o de enfermedades como consecuencia de emanaciones contaminantes o de accidentes en las centrales, consecuencias a largo plazo en la biosfera y repetitivas guerras del petróleo.

En los países industrializados, la gravedad de los problemas, la toma de conciencia de sus envites, el mayor poder de los movimientos y de los partidos ecológicos, van sin duda a favorecer el ensanchamiento de las prerrogativas del Estado protector con vistas a una gestión más "medio ambiental" de los recursos. De este modo, asistiríamos a la emergencia de una nueva mutación del capitalismo, que aceptaría, al menos parcialmente y en sus "bastiones" del Norte, ocuparse de la naturaleza como lo hizo con el keynesianismo respecto a las contradicciones sociales. Sin duda, la mayoría de los países industrializados son capaces de orientarse hacia sistemas más económicos en recursos, sin penalizar las condiciones de existencia y actuando sobre los aumentos de la eficacia energética financiados por tasas impuestas a las energías más contaminantes. Y no hay que subestimar la colosal inercia de los sistemas empleados.

Dos ejemplos: con el actual ritmo de construcción, el parque francés de la vivienda no se beneficiará globalmente, hasta el 2060, del ahorro de energía implicado en las nuevas reglamentaciones hechas en 1989. En el parque automovilístico, el impacto de los programas de investigación de los años 80, sólo se hará visible en Europa hacia el 2010. ¿Cuántos choques energéticos y cuántas guerras habrá hasta entonces? En cuanto a los países en vías de desarrollo, la mayoría aspira a una industrialización comparable a la que conocieron los países ricos gracias a una energía barata. Su pobreza les conduce a soluciones cuyos costes económicos inmediatos son los más bajos. Los perjuicios del uso de energías contaminantes parecen ser el precio que hay que pagar para poder desarrollar la economía y, a la vez, hacer frente a una demografía galopante. La persecución del espejismo del crecimiento puede aumentar la factura que deberán pagar las generaciones venideras para paliar la degradación del medio ambiente. Sin embargo, estos países son los más vulnerables a esta degradación.

Hablando en términos financieros, el Banco Mundial ha evaluado en 100 mil millones de dólares anuales las necesidades del sector, el equipamiento eléctrico de las naciones en vías de desarrollo; los organismos internacionales sólo pueden financiar 20 mil millones.

Al tenerse en cuenta inevitablemente los costes de producción de la energía se han cerrado, para todos, las vías del pasado. Los proyectos apoyados por el Banco Mundial, y que están dirigidos a aumentar la producción y el consumo a partir de grandes redes centralizadas, no responden ni a las necesidades ni a los medios de la mayoría de la población del Tercer Mundo. Las otras posibles vías se inscriben en una estrategia del tipo de DEFENDUS (para *development-focused, end-use-oriented, service-directed energy scenario*), que integra medidas de ahorro y de uso de energía renovables al servicio del conjunto de los usuarios (3). Esta estrategia preconiza la instalación de luz eléctrica en todas las viviendas, de cocinas económicas, de calentadores solares, etc.

Recomienda el uso equilibrado de energías variadas, en particular renovables, con cuatro prioridades para lanzar las bases de un desarrollo viable: dar una importancia preponderante a satisfacer las necesidades energéticas de base, evitar las obligaciones financieras que actualmente dificultan las técnicas clásicas; consumir los recursos de forma más eficaz; organizar la producción y el uso de la energía de manera que el impacto ecológico sea menor.

¿Cómo se puede orientar voluntariamente hacia un nuevo equilibrio duradero y equitativo la transición energética en la que ha entrado casi inconscientemente la humanidad? Tal equilibrio sólo se podrá alcanzar con una concienciación colectiva sobre el estado del mundo. Esta comprensión sólo podrá surgir a través de debates públicos sobre las relaciones entre los modos de vida y de energía, entre la guerra y la paz, a través de la búsqueda de soluciones democráticas para salir del actual estancamiento.

El interés de toda la humanidad está más ligado que nunca al de los "condenados de la Tierra". No obstante, las advertencias de control de la energía serán vanas mientras la transferencia masiva de recursos no permita a aquéllos la promoción de un desarrollo compatible con la mejora del medio ambiente y de las condiciones de vida; no tendrán efecto sin una encarnizada lucha contra las fuerzas que dominan el mundo, que han invertido mucho en las grandes industrias de producción de energía y que quieren sacar el máximo provecho de sus inversiones. Si la población sigue aumentando, dichas advertencias serán papel mojado. El crecimiento demográfico agrava los problemas sociales y ecológicos, y no se discierne en absoluto cómo podría estabilizarse la población antes de la mitad del siglo que viene, por debajo del doble de su nivel actual (4).

Cualquier otro discurso es pura demagogia e irresponsabilidad. En efecto, la estabilización del consumo actual -ya problemática ecológica y técnicamente- conduciría, con un reparto estrictamente igualitario de la energía disponible, a unos niveles de consumo por cabeza de menos de la mitad de los niveles actuales de consumo de

los europeos del Oeste. Si se admite este consumo-límite como un máximo aceptable para todos -cosa difícil de demostrar-, la producción de energía debería doblarse en menos de dos generaciones, teniendo en cuenta las hipótesis más probables de crecimiento demográfico. En un contexto de crisis generalizada respecto de la atmósfera, el agua, la tierra, la alimentación, etc., el futuro de todas las sociedades está en una revolución energética que sólo se producirá si cesa la hemorragia que, desde hace un siglo, vacía el campo de su gente y engrosa la miserable población de las ciudades irracionales. Y esta revolución energética es indisoluble de otra revolución -política, social y cultural- sin precedente histórico.

(1) Jean-Pierre Orfeuil, "Transport, énergie, environnement: le scénario Prométhée". *Futuribles*, n° 148, París, noviembre de 1990. Véase también Daniel Spelding, *Alternative Transportation Fuels: An Environmental and*

Energy Solution, Quorum Books-Greenwood. Westport, Connecticut, Estados Unidos, 1989.

(2) Systèmes solaires, número especial 64-65, "Du neuf sous le soleil", París, enero 1991: Jacques Roturier y Evan Mills, "Les économies d'énergie". *La Recherche*, n° 229, París, febrero de 1991.

(3) Amulya Reddy, José Goldemberg, "L'énergie dans les pays en développement". *Pour la science*, n° 157. París, noviembre de 1990.

(4) Léase al respecto "Démographie, développement, démocratie...et immigrations". *Le Monde Diplomatique*, mayo de 1990.

JEAN-PAUL DELÉAGE Y DANIEL HÉMERY SON coautores de *Servitudes de la puissance, une histoire de l'énergie*, Flammarion, coll. "Nouvelle Bibliothèque scientifique", París, 1989. Jean-Paul Deléage publicó en 1991 una *Histoire de l'écologie* (La Découverte, París).

(Tomado de *Le Monde Diplomatique*, Edición española. Año 1, N°6, abril 1996)

La indiferencia ambientalista frente a la potenciación del mercado

EDUARDO MORA CASTELLANO

En vastos círculos intelectuales es un tópico **la idea de que cuando la descarnada racionalidad del mercado ocupa el sitio del Estado interventor -que en condiciones de democracia representativa ha solido ser keynesiano- la naturaleza pierde**. Es decir, que sin la bienhechora tutela estatal los recursos naturales, y los ecosistemas que son sus continentes, quedan

a merced de la rapiña de los capitales, cuya única preocupación es crecer.

En la clásica izquierda política esa idea es persistente y central cuando se aborda el tema del ambiente. Mas en el movimiento ambientalista no es ni central ni determinante: hay quienes -en un extremo- la consideran falsa (a éstos no se hará referencia puntual en este artículo); hay otros -en el otro extremo- que, curtidos en viejos combates políticos, si bien no la estiman

central para explicar la problemática ambiental en el largo plazo, sí la juzgan correcta y muy valiosa para lograr adhesiones en la lucha por la naturaleza (éstos, que empíricamente no son ubicables diáfananamente dentro del movimiento ambientalista sino que parecen a caballo entre éste y otros movimientos, o cuya actitud no es constante y se manifiesta según las variaciones tácticas, son apenas rozados más abajo -ver nota nº 9-); y algunos más -ubicados en el largo intervalo existente entre ambos extremos- la tratan como una hipótesis irrelevante, que lo que más les suscita es indiferencia, precisamente porque desde su perspectiva lo sustantivo de la problemática ambiental está en otra parte y a ésta la conciben dentro de ciertas coordenadas y de acuerdo a ciertas premisas respecto de las cuales el Estado no es central ni especialmente apreciado (de éstos, muy mayoritarios, se tratará especialmente luego). Y es que, efectivamente, tal idea no es desprendida del universo conceptual o ideológico del original movimiento ecologista ni del actual movimiento ambientalista (1), ni tampoco de las visiones del resto de los nuevos movimientos sociales, sino de las elaboraciones ideológicas acompañantes de la práctica del movimiento obrero -en sus diversas expresiones- y del populismo; o sea, es una idea genéticamente ajena a los derroteros del pensamiento posmoderno. Las corrientes de acción propias de la posmodernidad que sí adoptan, por lo menos para efectos prácticos, la idea de que la cesión que hace el Estado al mercado de su lugar privilegiado es especialmente dañina para la naturaleza, o bien tienen una fuerte impronta *progresista* debida a la antigua formación de sus líderes reconvertidos - como atrás se señaló-, o bien se ven compelidas a ello por actuar en un contexto en el que, en virtud del carácter de sus adherentes y aliados -emparentados por una

u otra vía con viejos movimientos sociales- y de sus oponentes, es táctico hacerlo.

Pero hay que diferenciar claramente de una vez dos hechos referentes a la compleja relación mercado-sociedad, cuya confusión perturbaría la comprensión de las posiciones del movimiento ambientalista frente a esa "nueva" realidad consistente en que es crecientemente en el mercado que se toman las decisiones referentes a la gestión ambiental -dado que el Estado se contrae cediendo su lugar-. El primero es el hecho de que hace varios siglos la generalización de las relaciones económicas de mercado acompañó y fortificó el proceso de extrañamiento de los seres humanos con respecto de la naturaleza y de extrañamiento entre ellos -hecho fundamental en la historia de nuestra civilización-; y el segundo es el hecho, recientísimo, consistente en que la racionalidad del mercado en poco más de una década acreció abruptamente su poder de configuración de todas las decisiones que en la sociedad se toman (entre ellas las referentes al ambiente) (2), esto dentro de un proceso de cambio social caracterizado por la sustitución de una forma de dominación y orden social por otra: la sustitución del orden/dominación social a través de la coerción, en el que el Estado y la violencia son centrales, por el orden/dominación social a través de la seducción, en el que el mercado y la persuasión (a través de la expectativa real de ser pagado o no, de ser recompensado o descompensado económicamente y, en el extremo, marginado) devienen centrales. Hechos, tales dos, de muy desigual trascendencia: mientras que el primero es base -y a la vez definición- de la orientación de nuestra cultura, el segundo es solamente una matización de esa orientación, o, más bien, es la pérdida de la matización que tal orientación había venido teniendo desde los años 40-50, matización de la que estaba encargado el Estado y que

consistía en la atenuación de los efectos perniciosos que sobre ciertos sectores sociales -con capacidad de resistencia y desafío- venía ejerciendo la libre expresión del mercado, capacidad esa que, por cierto, empezó a menguar en los últimos tres o cuatro lustros en proporción directa a las modificaciones experimentadas por la estructura de la sociedad contemporánea y por esos mismos sectores y sus expresiones políticas.

Y es que la contracción del Estado y el traslado de ciertas funciones (otras funciones desaparecen) a agentes económicos y organizaciones ciudadanas se da junto con un proceso de cambio de las preocupaciones sociales: languidecen viejos asuntos problemáticos y emergen nuevos problemas -es decir, la sociedad define nuevos problemas-. De manera que estos nuevos son tratados sin la fuerza del Estado y en torno a ellos o se establece consenso social, o se llega a acuerdos en cuanto a que las diferencias de perspectiva y de acción son tolerables y coexisten pacíficamente, o, finalmente, tales problemas son tratados de manera distinta por cada uno de los subsistemas sociales, entre los que -en función de tales problemas- sería descabellado buscar siempre consenso porque operan muy especializadamente. Los nuevos problemas sociales son concordantes con los nuevos tratamientos. Y los resentimientos a causa de la contracción del Estado y de su desembozada sustitución por el juego del mercado se dan de parte de los sectores sociales fijados en los viejos problemas, sectores sociales usualmente favorecidos por el Estado keynesiano o, si no, altruistamente esperanzados en que bajo el cobijo del Estado y a través de transformaciones graduales de él podría alcanzarse la justicia para todos.

Ante la creciente influencia del mercado, dentro del movimiento ambientalista hay

diversas posiciones siendo la aplastantemente mayoritaria, como se dijo atrás, aquella que implícitamente considera el fenómeno como secundario, como irrelevante, o poco relevante, para el destino de la naturaleza. Quienes ostentan esa posición, que son tanto conservacionistas, ambientalistas en el sentido estrecho del término, como también ecologistas -muy minoritarios en el movimiento-, suelen encauzar sus esfuerzos intelectuales por los derroteros de la investigación en ciencias naturales y diseñando líneas de acción para la resolución de problemas, pero no en revuelta ni en adhesión hacia los poderes político y económico sino manteniéndose a distancia de posturas radicales y comprometidas. En esto los ecologistas -en el sentido estrecho del término- son excepcionales, pues sí desarrollan reflexiones sobre esos poderes y la sociedad en general (3), aunque pocas, porque ellos son pocos y el ambientalismo en general no es un movimiento retórico. Esas reflexiones, como el resto del discurso articulado por el movimiento ambientalista en su globalidad, tienden a coincidir en considerar la creciente influencia del mercado no como aquello que viene a romper viejas esperanzas o valiosos compromisos sino como un hecho acorde con la incapacidad relativa de los Estados, demostrada desde los años 70, de enfrentar cognoscitiva y resolutivamente el creciente deterioro ambiental. Si el Estado a quien cede su lugar rector es a la racionalidad del mercado que infiltra todos los ámbitos de decisión, entre ellos el referente al ambiente, entonces no hay mucho a qué temer ni nada que añorar. En tanto tal, el movimiento ambientalista -en el sentido amplio del término- no ha tomado posiciones dentro del Estado ni pactado con él en beneficio de nadie. Lo que ha hecho es, principalmente a través de permear ideológicamente decisivas instancias estatales y de ganar luchas

puntuales, mejorar las condiciones de realización de ciclos ecosistémicos importantes, lo que, si a alguien beneficia, además de a la naturaleza, es a todos y no a ciertas personas o grupos sociales, y dado que aquella infiltración es efectiva y rápidamente creciente, tales mejoras terminan por satisfacer en el corto plazo incluso a quienes ejercieron resistencia, por lo que no perduran ataduras ni agradecimientos con el Estado ni con el sistema de partidos que lo apuntala -ni tampoco, por cierto, con intereses privados con los que se hubiera tenido que negociar-. (Otra cosa es los compromisos, por favores recibidos, de ciertos líderes ambientalistas.)

De parte de los ambientalistas, concomitantemente, han existido los mismos o parecidos conflictos, y también acuerdos, con los capitales privados, que es con quienes se identifica popularmente el creciente poderío del mercado que es aquí objeto de examen. Por su experiencia, entre los ambientalistas el recelo hacia el mercado no es mayor que hacia el Estado, sino más bien frecuentemente menor. Así, un renombrado ecologista "puro", prominente entre Los Verdes de España, ha dicho que "existen signos que algunos movimientos ciudadanos, instituciones, pero sobre todo la misma industria y empresa, están empezando a estudiar esta contradicción (entre capital y naturaleza) antes postergada y empiezan a elaborar un discurso para comprenderla y minimizarla... Los partidos convencionales en cambio van algo retrasados en esta vía de sensibilizarse por esta contradicción" (4). Y es que aun los ecologistas que participan en las justas electorales disputando puestos estatales, como Los Verdes, logran no comprometerse significativamente con el Estado y el sistema de partidos gracias a regulaciones y limitaciones que se autoimponen precisamente para evitar las deformaciones centralistas, autoritarias,

burocráticas, nepotistas y en general antidemocráticas y antiautogestionarias que son especialmente abundantes entre la élite gobernante. Además, como ya se ha afirmado (5), los ecologistas "puros", herederos del ecologismo primigenio de los años 70, tienen una marca anarquista que los inclina contra el Estado y el sistema de partidos y, entonces, obligados a optar no es extraño que lo hagan por el mercado. Tal actitud del ecologismo primigenio, junto con otras, lógicamente sigue teniendo cierta presencia en el movimiento ambientalista actual.

Con este movimiento sucede que en la medida en que su objeto de preocupación es históricamente muy novedoso, emergido casi simultáneamente a la globalización económica y a la actual potenciación del mercado como instancia decisoria de todo, él no piensa tal objeto -o sea, el deterioro ecosistémico en su interacción con la sociedad- en relación con la vieja estructuración política, representada por el Estado-nación fuerte e interventor, sino en relación a la reestructuración política en marcha, que se expresa en nuevas o renovadas instancias (internacionales y extranacionales) de orientación y control global, las cuales, además -y esto no es secundario-, son aparentemente más adecuadas -por su cobertura- para enfrentar la problemática ambiental que, por definición, es inter y extranacional. Es decir, el movimiento ambientalista actual, constituido tal y como lo vemos desde los años 80, no desarrolló sus reflejos para la acción en el enfrentamiento con el fuerte Estado keynesiano teniendo como fondo un mercado restringido, sino que los desarrolló ya en un ambiente de mercado desbocado, Estado restringido y globalización. El tiempo de formación de este movimiento, como incluso también el del movimiento ecologista en el sentido estrecho del término, que se

remonta al inicio de los 70, es el tiempo en que la conflictividad sociedad-ecosistemas pasó a ocupar el lugar central y definitorio de la problemática social, y tanto el mercado como las instancias de regulación inter y extranacionales pasaron a ser los entes desembozadamente determinantes con los que obligadamente se empezó a contar para enfrentar aquella conflictividad y los cuales, entonces, no fueron percibidos primordialmente como aguafiestas de nada, aunque tampoco como salvadores, sino simplemente como enormes entidades ineludibles, "naturales" en el nuevo escenario, como lo venía pareciendo el Estado interventor.

La presión ambientalista, además de ser ejercida como ideología que se infiltra en todos los subsistemas sociales y en todas las organizaciones, y también más allá de ser ejercida a través de movilizaciones y propuestas de acción por los grupos organizados, la ejercen cada vez más los ciudadanos como consumidores -los cuales a su vez van cayendo presas de esa expansiva ideología-. Y los agentes de producción económica, que ya no pueden realizar sus mercancías sino persuadiendo y, entonces, ajustando su oferta a los consumidores (las dificultades al fingimiento y al fraude aumentan), se ven a la larga compelidos a actuar bajo la presión ambientalista. "Lo que sí puede hacer el mercado -dice un ecologista que no cree en la sostenibilidad del actual modelo de crecimiento económico y que desde el ángulo de la economía crítica la confianza que tienen en el mercado sus colegas de la 'esfera oficial' (6)- es inducir a la reducción de algunos consumos y generar la aparición de un sector de empresas medioambientales orientadas a 'reparar' algunos de los efectos más visibles del caos ambiental, a hacer soportable el modelo de crecimiento actual". Acaso de manera semejante acontezca, por ejemplo, con

respecto del acoso sexual y los malos tratos a mujeres y a menores: tiende galopantemente a establecerse un consenso social en contra de ello -todos los subsistemas sociales coinciden a pesar de su diferenciación funcional-, tal que la represión del Estado -a diferencia, por ejemplo, de con el robo o las infracciones a las leyes de tránsito- parece hacerse cada vez más prescindible. En este ámbito la racionalidad del mercado también se impone, siendo tendencialmente descompensada o marginada económicamente la entidad que disiente, sin que el Estado deba intervenir punitivamente. Asimismo, aquí, la orientación es cada vez más emanada de instancias inter y extranacionales.

Podría decirse que lo que los ambientalistas creen presenciar actualmente es una -parcial- retirada del Estado, no caótica sino delegando funciones -más tácita que explícitamente- a actores económicos y a otras organizaciones autónomas, procurándose así una continuación del orden social pero ya no por la vía de la coerción sino del pago/no pago, de la recompensa y la descompensación económicas. Y los novedosos problemas que a ellos les apuran no ven por qué no puedan ser enfrentados dentro de esas coordenadas -con las viejas coordenadas los enfrentaron incipiente e infructuosamente o no los enfrentaron-. Sin que esto por supuesto signifique que los ambientalistas, con excepción de un sector "neoliberal" no representativo del movimiento, crean en la racionalidad del mercado como solución a la problemática ambiental. La mayoría, como está ya dicho, tiende a ignorar ese tema, para ellos no es relevante. Así, por ejemplo, para Amigos de la Tierra, multitudinaria red mundial de grupos ecologistas constituida en 1969 como un desgajamiento de la centenaria y también multitudinaria organización conservacionista norteamericana denominada Sierra Club, el

Banco Mundial y el Fondo Monetario son criticables pero el juicio que ejerce contra ellos es más puntual y suave que teórico y acerbo. La dirección europea de Amigos de la Tierra mantiene relaciones estables y permanentes con esos organismos -reputados promotores de la potenciación del mercado- y con los grandes capitales privados; el poder de ellos no es cuestionado, como tampoco lo es, por cierto, el de los gobiernos con quienes también mantiene comunicación fluida. La legitimidad y pertinencia del mercado y de la multiplicación de su influencia no es puesta en duda (7). Similarmente, para el movimiento ambientalista costarricense (8) la potenciación del mercado no es un problema central a considerar, existiendo acaso sólo un grupo que sí lo estime como tal, grupo que bien podría conceptuarse -de acuerdo a lo que párrafos atrás se señalara- como de fuerte impronta *progresista* (concepto éste que en el presente caso remite a las aún recientes gestas sociopolíticas de la modernidad, protagonizadas por los movimientos obrero y campesino) por el carácter de sus oponentes, adherentes, metas y líderes (9). La Asociación Ecologista Costarricense (AECO), único grupo perteneciente a la corriente ecologista dentro del movimiento ambientalista tico, y, a la vez, el grupo activista de mayores influencia en la ciudadanía e impacto en luchas, tampoco tiene eso como problema destacado, orientando en cambio su crítica -al igual que el resto de la corriente a la que pertenece, como se verá de inmediato- más a lo profundo: a los "modelos de sociedad" hasta hoy implantados y al "sistema productivo" que los acompaña (10) (11). Para Los Verdes europeos, mientras tanto, este tema tampoco resulta digno de gran atención. Así, por ejemplo, en un documento que pretende ser manifiesto de la posición política que debieran tener Los Verdes de

España en pos del logro de una sociedad alternativa (12), no se menciona nada sobre el asunto de marras; igualmente omisos son otros verdes que disertan sobre economía y ecología en la misma revista que publica el documento, la cual, además de ser dirigida por uno de ellos, suele recoger sus posiciones. Y desde la sub-corriente ecologista que podría calificarse como más crítica del capitalismo y del mercado, e incluso más insistente en articular las demandas en pro de la naturaleza con la reivindicación de un nuevo ordenamiento social sin explotación humana, se niega explícitamente que sea la reciente potenciación neoliberal del mercado quien conspira contra el manejo sustentable y la conservación de los recursos naturales, y se afirma que quien conspira es el mercado a secas, el mercado de siempre (13).

Referencias

1. La distinción entre las corrientes constitutivas del movimiento ambientalista -el conservacionismo, el ambientalismo en sentido estrecho y el ecologismo- están explícitas en: Mora, E.: "Eclipse del Estado y eclosión del ambientalismo", en *Ambien-tico*, N° 39, abril 1996, pp. 9-15.
2. Cf.: Mora, E.: "Naturaleza y humanidad son sólo valores económicos", partes 1ª y 2ª, respectivamente en: *Ambien-tico*, N° 40, mayo 1996, pp. 11-16, y *Ambien-tico*, N° 41, junio 1996, pp. 1-6.
3. Ciertos hechos, que abajo se exponen, condujeron a que, en función de examinar la/s posición/es del movimiento ambientalista ante el fenómeno de la potenciación del mercado, aquí se apelara -aparte de a *Ambien-tico*- a tres publicaciones periódicas emitidas por sendas expresiones de la corriente ecologista del movimiento ambientalista. Tales publicaciones son: *Link*, revista/boletín mensual -editada en Amsterdam- de Amigos de la Tierra; *Tierra Amiga*, editada por Redes (Red de Ecología Social), organización ecologista uruguaya, y *Ecología Política*, española, dirigida por Juan Martínez Alier -perteneciente a Los Verdes de Cataluña- y por el norteamericano James O'Connor, quien además dirige la revista californiana *Capitalism Nature Socialism. A Journal of Socialist Ecology*, que fue fundada en 1988 y es la pionera de un cuarteto de revistas con similar orientación -que se intercambian los materiales para publicar- al que pertenecen, además de las dos dichas, la francesa *Écologie Politique* y la italiana *Capitalismo Natura Socialismo. Rivista di ecologia socialista*, mismas que han manifestado aceptar como hermana a la uruguaya *Tierra Amiga*, a pesar de que ésta no es principalmente teórica,

como sí las otras, sino más bien ligera y periodística. Las une su criticidad frente al capitalismo y el ser realmente ecologistas. Los hechos que condujeron a que el análisis se centrara en tales tres revistas son los siguientes: (1) las expresiones conservacionista y ambientalista -en el sentido estrecho del término- del movimiento ambientalista no ejercen ninguna crítica a la potenciación del mercado ni a la economía de mercado, como queda claro en los escritos generados por sus organizaciones representativas mayores -como por ejemplo UICN y WWF-; (2) quien más se acerca a esa crítica es la corriente ecologista del movimiento; (3) la producción de manifiestos **teórico-ideológicos** de parte del movimiento ambientalista es minúscula y -posiblemente- proporcionalmente inversa a su tamaño e influencia (además el flujo hacia Costa Rica es casi nulo), y (4) quien sí suele generar ese material teórico-ideológico dentro del movimiento ambientalista es -otra vez- la corriente ecologista.

4. Piulats, Octavi: "Teoría y praxis de la política verde en el Estado español", en *Ecología Política*, N° 3, Barcelona, p. 67.

5. Cf., entre otros: Mora, E. 1994.: **Claves del discurso ambientalista**, Editorial FUNA, Costa Rica, pp. 117-120.

6. Recio, Albert: "Los problemas del movimiento ecologista en el Estado español", en *Ecología Política*, N° 3, Barcelona, p. 88.

7. Cf.: **Link. Friends of the Earth**. Issue 60 (may-jun 94), 61, 62-63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 (oct-dec 95). Amsterdam.

8. Véanse, de Mora, E., 12 caracterizaciones de sendos grupos ambientalistas ticos, representativos del movimiento ambientalista nacional, aparecidas en **Ambien-tico**: desde la edición N° 6, abril 1993, hasta la N° 22, setiembre 1994.

9. Se trata de la Coordinadora de ONGs Con Proyectos Alternativos De Desarrollo (Coproalde), constituida por ocho grupos, que persigue "la organización, la autonomía y

el mejoramiento de las condiciones de autoreproducción del campesinado, como también la explotación sustentable de los cosistemas y la independencia tecnológica", y que, además, reivindica un papel activo del Estado propiciando la participación popular y evitando la inequidad económica, y que, finalmente, concibe como su enemigo a los organismos financieros internacionales. Los fundadores principales de Coproalde provinieron del movimiento cristiano inspirado en la teología de la liberación y su fuente principal de financiamiento ha sido la entidad alemana de ayuda al Tercer Mundo -con recursos de la iglesia luterana- llamada Pan Para El Mundo. Este conjunto de grupos, no obstante haber sido incluido dentro del ambientalismo tico para efectos de estudio, no se reconoce parte del movimiento ambientalista, al que juzga romántico y poco realista, aunque comparta reivindicaciones -y es por esto por lo que fue incluido-. Cf.: Mora, E.: "Coproalde pretende un desarrollo alternativo con base agroecológica", en **Ambien-tico**, N° 22, setiembre 1994, pp. 14-16.

10. Mora, E.: "La Asociación Ecologista Costarricense (AECO), en pos de un movimiento social ecologista y una sociedad alternativa", en **Ambien-tico**, N° 10, setiembre 1993, pp. 6-8.

11. **Comunicación personal** con Isaac Rojas, directivo de AECO, 19-6-96, San José.

12. Buades, Joan: "Refundar la política, afianzar la constelación verde. Llamamiento por una alternativa contemporánea", en *Ecología Política*, N° 7, Barcelona, pp. 113-119.

13. Barreiro, Jorge: "La izquierda y el 'descubrimiento' de la ecología", en *Tierra Amiga*, N° 29, octubre 1994, Uruguay, p. 41.

AMBIEN-TICO está disponible en los siguientes puntos de distribución: en San José: librerías Macondo, Mil Copias y Cooperativa Universitaria; en Heredia: Escuela de Ciencias Ambientales. A los interesados en su adquisición se les agradecerá una contribución de 100 colones por ejemplar. Por una suscripción anual se ruega la suma de 1000 colones, o, si el envío ha de hacerse al extranjero, de 70 dólares. Además **AMBIEN-TICO** está en WEB de Internet en las páginas de la Universidad Nacional, sección de la Escuela de Ciencias Ambientales.